III. EXPEDIENTE D-11231 - SENTENCIA C-493/16 (Septiembre 14)
M.P. Alejandro Linares Cantillo

1. Norma acusada

LEY 1149 DE 2007
(Julio 13)

Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos

Artículo 10. El artículo 66 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social quedará así:

Artículo 66. *Apelación de las sentencias de primera instancia.* Serán apelables las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, **en el acto de la notificación mediante la sustentación oral estrictamente necesaria**; interpuesto el recurso el juez lo concederá o denegará inmediatamente.

2. Decisión

Declarar **EXEQUIBLE** la expresión "*en el acto de la notificación mediante la sustentación oral estrictamente necesaria*" contenida en el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, que modificó el artículo 66 del Código de Procedimiento Laboral, por los cargos analizados.

3. Síntesis de la providencia

Los cuestionamientos que le correspondió resolver a la Corte en esta oportunidad, plantearon de un lado (i) si el legislador al establecer la sustentación oral del recurso de apelación dentro de la audiencia de fallo, desconoció el derecho a un trato igualitario de los usuarios de la jurisdicción laboral y de la seguridad social frente a los ciudadanos que acuden a la jurisdicción penal, en tanto éstos cuentan con mayores beneficios en lo atinente al tiempo y al modo para

sustentar el recurso de apelación; de otra parte, (ii) si dicha medida legislativa resulta desproporcionada al establecer una carga procesal que hace nugatorios el derecho a la doble instancia y el acceso efectivo a la administración de justicia.

El análisis realizado por la Corte concluyó en la constitucionalidad de la expresión normativa acusada contenida en el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, respecto del cargo por vulneración del derecho a la igualdad formal ante la ley (art. 13 C.Po.), al constatarse que los supuestos en los que se funda la sustentación de la apelación en materia penal y laboral no son asimilables, no solo por la especialidad de los asuntos que se ventilan en cada una de dichas jurisdicciones, sino porque dentro de la amplia facultad discrecionalidad del legislador para determinar los recursos, excepciones y términos de cada procedimiento, estableció como eje rector de la jurisdicción laboral el principio de la oralidad, mientras que en la penal, con el fin de promover la descongestión judicial, implementó la sustentación mixta del recurso. Adicionalmente, por las características particulares de los derechos de los usuarios, puesto que las garantías de la doble instancia en los asuntos penales cuentan con un mayor respaldo constitucional, al ser parte esencial del núcleo fundamental del derecho, mientras que si bien los derechos de los trabajadores son mínimos e irrenunciables, los recursos previstos en los asuntos procesales son objeto de un mayor margen de acción en cuanto a su configuración.

De igual modo, la corporación estableció que la acusación de afectación desproporcionada e irrazonable del derecho a la doble instancia (art. 31 C.Po) y el efectivo acceso a la administración de justicia (art. 229 C.Po.) no estaba llama a prosperar, por cuanto la finalidad de la *celeridad* en la jurisdicción ordinaria laboral no se encuentra prohibida y en efecto se materializa a través de la medida de la oralidad como principio rector dentro de los procesos surtidos ante la jurisdicción ordinaria laboral. La Corte estimó razonable la exigencia de dicha carga procesal a la parte recurrente, que como parte afectada no puede considerarse sorprendida con la decisión adoptada en primer instancia, ya que cuenta con la posibilidad y el deber legal de participar activamente en las etapas previas al proceso. En todo caso, advirtió que el recurrente cuenta con la garantía de ser oído durante un tiempo prudencial acorde con la densidad del fallo y de hacer valer sus propias razones y argumentos en una segunda instancia, sin que represente un quebrantamiento del derecho a conocer, controvertir las pruebas e intervenir en su formación, intereses que son protegidos mediante los principios de consonancia y congruencia. Ante la imposibilidad de reproducir el audio de la audiencia, el juez deberá absolver las dudas que la sentencia genere a los apelantes, para permitir que el recurso se plantee sobre bases sólidas de conocimiento y comprensión del fallo a recurrir. Por consiguiente, el segmento normativo acusado del artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, fue declarado exequible.

4. Salvamento y aclaraciones de voto

El magistrado **Alberto Rojas Ríos** manifestó su salvamento de voto frente a la decisión de la mayoría de declarar la exequibilidad de la expresión demandada del artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, que exige la sustentación oral del recurso de apelación contra la sentencia laboral de primera instancia, en el mismo acto de notificación.

En su concepto, el test leve de razonabilidad y proporcionalidad de la medida que aplicó la Corte en esta sentencia no era el adecuado, toda vez que en la disposición que se acusó están en juego derechos fundamentales que estructuran el debido proceso, como el de impugnar el fallo que sea desfavorable, acorde con el principio de doble instancia, que viene acompañado con el de sustentar el recurso para que no sea nugatorio, así como el derecho de igualdad formal ante la ley procesal, que debían ser ponderados por lo tanto, frente al principio de celeridad en la jurisdicción laboral, por medio de un test estricto. Establecer que el recurrente debe sustentar oralmente el recurso de apelación en el mismo acto de notificación de la sentencia, dificulta la defensa efectiva contra un fallo que es desfavorable a los intereses del recurrente, mientras que ante otras jurisdicciones, como la penal, se cuenta con más tiempo para sustentar el recurso, inclusive mediante escrito. Consideró que la celeridad que se busca en el proceso laboral no justifica que se elimine la garantía de un recurso efectivo contra la sentencia que niega las pretensiones de quien recurre y por tanto la oportunidad de la doble instancia. Por estas razones, la decisión ha debido ser de inexecutable.

El magistrado **Aquiles Arrieta Gómez** anunció una aclaración de voto y la magistrada **Gloria Stella Ortiz Delgado** se reservó una eventual aclaración sobre uno de los fundamentos.